

La guerra que nunca quisimos ver

Plinio Apuleyo Mendoza

VIOLENCIA POLITICA Y GUERRA EN COLOMBIA

El dramático aumento de la violencia política y terrorista en Colombia ha puesto en tensión los recursos del conjunto social para plantear o imponer alternativas a su escalada autónoma. A finales del 92 la prensa colombiana reprodujo intervenciones sobre la cuestión; aquí incluimos la carta de intelectuales colombianos a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, la respuesta de ésta, y dos reflexiones de Plinio Apuleyo Mendoza y Horacio Serpa Uribe junto con un ensayo sobre el tema elaborado especialmente por Francisco Leal Buitrago.*

He creído, a propósito de la llamada política de paz, que Colombia ha sido víctima de un diagnóstico errado. No sé cómo se produjo. Quizá el primero en acogerlo y apoyarse en él para intentar la pacificación del país fue Belisario Betancur. Belisario es un idealista y un hombre de temperamento generoso, en cuya formación han debido concurrir, en dosis equivalentes, el pensamiento de santo Tomás, las encíclicas papales y, de manera un tanto subrepticia, las ideas de Carlos Marx que, en sus tiempos de estudiante y entre muchos de sus amigos, tenían un aura de avanzada. Así, con su buen corazón y este bagaje ideológico, un tanto promiscuo, Belisario decidió buscar la paz a través del diálogo, en vez de proseguir el severo tratamiento represivo aplicado a la guerrilla por su antecesor, Julio César Turbay.

Su propósito, como es de público conocimiento, no llegó a cumplirse. Fracasó en parte porque las Fuerzas Armadas, considerándose desestimadas por el Gobierno, no le dieron un real apoyo. Y en parte aún mayor, porque la guerrilla, fiel a sus dogmas y consciente de esta hostilidad militar, seguía mirando la lucha armada como su medio de acción privilegiado. El símbolo de este fracaso fueron las llamas del Palacio de Justicia.

* Estos dos textos aparecieron en *El Tiempo* («Lecturas Dominicales»), Bogotá, en su edición del 29 de Noviembre de 1992.

Fracasó un propósito, pero no la política de diálogo, recogida y desarrollada por los posteriores gobiernos de Virgilio Barco y por el actual de César Gaviria. Por largo tiempo fue algo parecido a un dogma oficial y en todo caso un ritual lugar común que se ha propagado en declaraciones oficiales y en el discurso político. Ha sido, a la vez, pensamiento dominante y figura retórica de uso obligado.

El diagnóstico que sirve de base a dicha política podría enunciarse de la siguiente manera: no hay sino dos vías para poner fin al conflicto armado que ensangrenta a Colombia desde hace treinta años. La primera es la vía pacífica y civilizada del diálogo. La otra es la guerra. La guerra tiene para Colombia un costo terrible. El país está cansado de violencia: de sangre, secuestros y asaltos. Por consiguiente, debe insistirse, ante todo y sobre todo, en la negociación política como medio de conseguir la paz. En apoyo de esta propuesta, se recuerda siempre los buenos resultados conseguidos, a través del diálogo, COD el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, hoy insertados en la vida civil y, en el caso del primero, con un fuerte protagonismo político. De esta suerte, toda la política oficial frente al problema de la subversión se edificó sobre un dilema: diálogo o guerra. Hay, sin embargo, altas probabilidades de que se trate de un falso dilema.

El camino de Chamberlain

Falso, en primer término, porque no depende de la Nación ni de su Gobierno elegir entre el diálogo y la guerra. Cualquier colombiano de bien a quien se le proponga, por medio de una encuesta de opinión, dicha alternativa, optará, obviamente, por el diálogo. Pero, en realidad, se le está consultando un anhelo personal y no una opción a su alcance.

Ahora, bien, es muy peligroso construir una política sobre los anhelos de una de las dos partes en litigio sin tomar en cuenta lo que piensa y quiere la otra. El descalabro de Neville Chamberlain en Inglaterra, poco antes de que estallara la segunda guerra, debería servirnos de ejemplo. Los ingleses, como es obvio en cualquier pueblo civilizado, no querían la guerra sino la paz. Chamberlain lo sabía, y para no contrariar este sentimiento dominante en su país, buscó la paz con Hitler a cualquier precio, inclusive el ignominioso de permitir la ocupación de Checoslovaquia por los nazis. Pero con ello no consiguió la paz. Al contrario, precipitó la guerra porque Hitler, interpretando este pacifismo como debilidad de las democracias occidentales, consideró que nada podía detener sus proyectos expansionistas. Invadió a Polonia y estalló la conflagración.

En esas circunstancias, Churchill resultó para la Gran Bretaña un hombre providencial. Los hechos le habían dado la razón. En vez de guiarse por los anhelos subjetivos y unilaterales de su pueblo, fundó su política en la realidad. Y la realidad es que Hitler no quería la paz sino la guerra. Para ella se había preparado y por medio de ella - no podía haber otro camino - buscaba realizar su proyecto de apoderarse de Europa.

De la misma manera nos correspondería a nosotros, y le correspondería en primer término a quien nos gobierne y a quien quiera en el futuro inmediato gobernarnos, admitir la realidad de esa guerra, que no queremos pero que nos ha sido impuesta, al margen de nuestra propia voluntad, por la subversión. Basta abrir un periódico o mirar un noticiero para saber que ella, la guerra, está ahí. Podemos compararla con un cáncer. A nadie le gusta un cáncer, pero si el cáncer por desgracia aparece es mejor identificarlo y afrontarlo en vez de desconocerlo haciendo la hermosa apología de la salud. Nuestro dilema real no es, pues, elegir entre la paz y la guerra, entre el diálogo y el conflicto armado, pues la insistencia en lo primero no nos exime de lo segundo. Nuestro real dilema es hacerle frente a esa guerra con firmeza o con debilidad. Dejar que la subversión devore al país o detenerla y derrotarla. No hay otra vía.

Es peligroso, nos dirán, cancelar rotundamente la opción del diálogo. Debe perseverarse en él, como se perseveró con el M-19 o con el EPL, por momentos tan reacios en comprometerse en la negociación, hasta que se llegó con ellos a un acuerdo. Con perdón de quienes así piensan, la consideración es simplista. Se está comparando lo que no es comparable. Para que una analogía tenga validez debe establecerse entre fenómenos de naturaleza similar. Y tal no es el caso cuando se espera conseguir con la Coordinadora Guerrillera el acuerdo a que se llegó con el M-19. El M-19 tenía necesidad de negociar; la Coordinadora, no. Vamos a ver por qué.

En el gobierno de Virgilio Barco, el M-19 no tenía ya mucho que ganar con la guerra y sí mucho que ganar con la paz. Militarmente estaba seriamente golpeado, con sus fuerzas concentradas principalmente en dos departamentos, el Cauca y el Huila. Había perdido sus mejores estrategias de la lucha armada: Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, Alvaro Fayad y Luis Otero. Aunque hubiese mostrado talento en el campo militar, el sucesor de estos comandantes, Carlos Pizarro, valoraba mejor que ellos la salida política. No era un marxista leninista como los dirigentes del ELN y las FARC. No buscaba imponer, por medio de la lucha armada, un

sistema comunista, sino buscar nuevos espacios políticos y transformaciones sociales con unas confusas recetas de corte nacionalista o populista.

Para lograr la paz por medio del diálogo se necesitan, como para un matrimonio, dos voluntades. En el M-19, a fuerza de reveses dramáticos, esa voluntad acabó por germinar. También, es cierto, la tenía el Gobierno. A partir de esa convergencia, el acuerdo fue posible. Personalmente lo apoyé. Lo veía viable.

La aspirina sirve para curar la gripe pero no para curar el cáncer. Con el diálogo sucede lo mismo. Sirve con quien obtiene ventajas de la paz y no con quien las consigue con la guerra. Este es el caso de las FARC y del ELN. Muy pocos de los numerosos asesores y consejeros de paz del Gobierno, estoy seguro, se han tomado el trabajo de ver todo lo que las dos organizaciones guerrilleras, especialmente las FARC, han logrado con su estrategia de combinación de formas de lucha, y evaluar hasta qué punto este es un capital político, militar y económico irrenunciable.

Un proyecto triunfante

La hipótesis más recomendable para orientar una nueva política oficial hacia la subversión podría expresarse de la siguiente manera: las dos fuerzas que integran la Coordinadora Guerrillera, las FARC y el ELN, no buscan la paz sino la victoria de su estrategia de la toma del poder por la combinación de formas de lucha, y entre ellas, la más importante y decisiva, la lucha armada.

A muchos colombianos, y probablemente al propio Gobierno, debe resultarles absurdo siquiera imaginar viable semejante prospecto. La guerrilla representa una minoría ínfima y el tipo de Estado que quisiera imponernos es el mismo que se derrumbó en la URSS y en los países del este europeo. Nadie admitiría, además, un nuevo régimen comunista en América Latina.

Estos argumentos son los nuestros, no los del cura Pérez, Manuel Marulanda o Alfonso Cano. Ellos no razonan como Gorbachov sino como Fidel Castro. Para ellos (¿y por qué no creerles si lo dicen en todas las formas posibles?) el socialismo no ha muerto. Está vivo en estas tierras. Se han conferido a sí mismos la misión de demostrarle al mundo, con hechos y no sólo con palabras, que semejante opción no ha perdido vigencia. Así no reciban, como antes, el apoyo financiero y logístico de Cuba (hoy no lo necesitan, además) responden a la estrategia defensiva de Castro. Castro, no lo olvidemos, es el hombre de los retos sublimes. Nadie creía que era posible establecer un régimen comunista a noventa millas de la Florida, y lo

consiguió. Nadie da un centavo hoy por el comunismo y él llena pancartas y paredes de su infortunado país con el lema: «marxismo leninismo o muerte». Su descomunal voluntarismo lo lleva a creer, pese a estar acorralado, o tal vez por ello mismo, que su mejor defensa es un resurgimiento del proyecto revolucionario en América Latina. Dentro de esa visión que pisa el delirio, Colombia sería un país clave.

Lo extraordinario es que para las FARC y el ELN esta opción no resulta descabellada. Cualquier utopía deja de serlo cuando echa raíces en la realidad. Y la verdad abrumadora que nos hemos negado a ver es que la subversión ha logrado en los últimos años, paso a paso, todos sus objetivos. La suya, aunque duela reconocerlo, es una estrategia triunfante.

El VII Congreso de las FARC, que tuvo lugar en 1983, se propuso metas muy concretas de carácter militar, político y económico, según consta en sus propios documentos.

En el plano militar, el objetivo era pasar de 16 frentes, que entonces tenían las FARC, a sesenta al terminar los 80. Lo consiguieron. Las acciones que antes movilizaban compañías de treinta hombres, hoy se realizan con columnas de cien y a veces de cuatrocientos, como en los ataques a Dabeiba y Tarazá. Su presencia, que antes se limitaba a zonas del país más bien marginales, hoy se extiende a todos los departamentos, incluyendo a los en otro tiempo más pacíficos y ajenos al fenómeno guerrillero, como Boyacá. La frecuencia de los ataques, que en 1983 era de dos por mes, en promedio, hoy es casi diaria y a veces se produce en las puertas mismas de la capital. Siniestramente, las incursiones guerrilleras se han enriquecido con un nuevo ingrediente; el terrorismo, no sólo contra personas o bienes del Estado, sino contra la propia e inerte sociedad civil.

En el plano político, se definió entonces la estrategia de combinación de formas de lucha como medio de extender y profundizar los efectos de la acción armada. La Unión Patriótica y A Luchar corresponden a este diseño táctico al servicio de la estrategia subversiva. A este respecto, los dirigentes comunistas muestran una doble cara. Cuando les conviene, niegan públicamente cualquier vinculación orgánica con la «insurgencia», como llaman a la guerrilla, sin dejar por ello de conferirle legitimidad. Internamente, en los documentos que circulan entre los militares de extrema izquierda, no hacen misterio alguno sobre esta relación. «El hecho - declaraba en 1973 Gilberto Vieira en el libro de Umberto Valverde *Tres vías a la revolución* - es que el partido comunista participa en la lucha armada. Tiene un

organismo, las FARC». Y 15 años más tarde, a la socióloga chilena Marta Harnecker: «Comprendemos que en el desarrollo estratégico, la lucha armada va a ser la más importante» (*Combinación de formas de lucha*, Editorial Suramérica, 1988).

Estos brazos políticos han sido particularmente eficaces para obtener, gracias a la negligencia de los dos partidos tradicionales, una creciente influencia en los sindicatos de las empresas estatales, especialmente en la US0, en las empresas públicas municipales de las principales ciudades del país, en Telecom, en el ISS, Cajanal, la Registraduría, puertos, etc. Igualmente, cosa por demás inquietante, tienen enclaves importantes en Fecode y Asonal Judicial. De esta manera, y gracias a un trabajo realizado durante años, la subversión tiene al alcance de su mano los centros nerviosos del Estado.

Dentro de la misma estrategia sutil, el brazo político de la guerrilla ha conseguido utilizar en provecho suyo diversas organizaciones de derechos humanos, algunas de ellas con fachadas muy honorables. Su tarea principal es multiplicar denuncias no sólo contra llamados grupos paramilitares, reales o ficticios, sino también, y principalmente, contra los oficiales de las Fuerzas Armadas que realizan operaciones contra guerrilleras. Aunque rara vez estas últimas denuncias son fundadas, y por consiguiente, no concluyen en sanciones, obtienen un efecto inhibitorio en los mandos militares, colocados sorpresivamente en el papel de acusados y obligados a aportar pruebas y recursos legales en defensa de sus actuaciones. Es lo que se ha dado en llamar «el síndrome de la Procuraduría».

Un Estado más débil

Todo esto lo ha logrado la subversión movilizand o sus propios agentes y confiándoles misiones precisas. Pero su mayor éxito no está allí. Es el resultado de un trabajo sutil y eficiente encaminado a debilitar la capacidad defensiva del Estado, sacando el máximo partido de ideas y sentimientos civilistas o antimilitaristas, siempre latentes en áreas respetables de la opinión. No en balde un fantasma histórico del continente ha sido el del autoritarismo y las dictaduras militares. Dirigentes políticos, legisladores o catedráticos que se consideran a sí mismos de avanzada son receptivos a cualquier propuesta tendiente a limitar las atribuciones de la institución castrense.

A la sombra de este sentimiento prosperaron en la pasada década dos funestas iniciativas, alentadas por el brazo político de la subversión y acogidas, respectivamente, por los gobiernos de Betancur y de Barco antes de convertirse en

normas de la nueva Constitución. Me refiero al impedimento de que la Justicia Penal Militar juzgue a civiles, y a la supresión del llamado fuero militar. Las dos constituyen quizá el mayor triunfo obtenido en los ochenta por la guerrilla.

Hasta el gobierno del presidente Turbay, jueces militares tenían atribuciones para ordenar allanamientos, dictar contra subversivos o terroristas autos de detención y sancionarlos por medio de consejos de guerra. Gracias a semejante expediente se recuperaron con notable prontitud las siete mil armas robadas por el M19 en el Cantón Norte de Bogotá; o juzgar y condenar a los dirigentes de esta organización, capturados a raíz de los desembarcos de guerrilleros provenientes de Cuba en la costa del Pacífico. El juez militar es una pieza fundamental de la lucha antsubversiva. No está amedrentado, como ocurre a veces, en zonas candentes de la acción guerrillera o del narcotráfico, con los jueces civiles. En vez de entorpecer la acción militar o policial, el juez militar la secunda confiriéndole los instrumentos legales que necesita.

Este recurso, que había permitido combatir la subversión con eficacia, infligiéndole golpes tan memorables como los de la operación Anorí o los del Chocó y Putumayo al M-19, desapareció en la nueva Constitución bajo el postulado de que «ningún civil puede ser juzgado por un militar». La palabra civil remite, en el imaginario colectivo, a un ser inerme, tal vez un catedrático, un poeta o dirigente universitario, expuesto a la eventual arbitrariedad de un «chafarote» militar. A nadie se le ocurrió pensar que ese civil, susceptible de comparecer ante un consejo de guerra, viste uniforme lleva granadas al cinto y un fusil a la espalda, mata, asalta, roba o secuestra en nombre de una organización que puede llamarse Ejército de Liberación, Fuerzas Armadas Revolucionarias o Ejército Popular. Es decir, una entidad militar que reconoce y proclama su guerra irregular y la práctica, incorporando a ellas formas de terrorismo. Por todas esas circunstancias, no tiene un guerrillero por qué tener las prerrogativas de un ciudadano cualquiera. Es un combatiente que, de acuerdo con su propia ley, debe estar sujeto a la justicia militar.

El otro golpe fatal dado a las Fuerzas Armadas, gracias a la acción de los famosos «idiotas útiles» de que hablaba Lenin, fue la supresión del fuero militar. Mediante el Decreto 10 del 10 de enero de 1989, expedido por el gobierno Barco, militares y policías quedaron a partir de aquella fecha asimilados a la categoría de empleados públicos. Hasta entonces, esta era labor de instancias internas de las Fuerzas Armadas. Los militares eran investigados y eventualmente sancionados sólo por militares. Es algo usual en muchos países, pues se entiende que su misión, más aún

en tiempos de guerra, es de naturaleza muy distinta a la de un empleado de correos o de cualquier otro funcionario civil.

Todo civil desprevenido simpatiza con la idea de que militares y policías no tienen por qué estar amparados por un fuero especial. A la luz de estas consideraciones y principios, nadie tuvo en cuenta el arma legal dada a las FARC, el ELN y sus brazos políticos. La Procuraduría se convirtió en un medio ideal de crear en los oficiales un síndrome inhibitorio. Cualquier acción suya en un frente de orden público desencadena sistemáticamente una verdadera lluvia de denuncias, hábilmente fundamentadas por los comités de Derechos Humanos que la propia subversión ha creado; denuncias que la Procuraduría se siente obligada a recoger e investigar. Así, aunque ellas, infundadas como son, no concluyan en sanción alguna, con el hecho mismo de obligar a oficiales a responder interrogatorios de abogados visitantes, que ignoran hasta lo más elemental de operaciones militares; a presentar pruebas, a buscarse abogados pagados de su propio bolsillo, se consigue el efecto buscado, la pasividad. La única manera de no tener problemas es quedarse quieto.

El tercer gran triunfo de la guerrilla, logrado a través de respetables voceros de los dos partidos, especialmente del liberalismo, fue el desmantelamiento de las autodefensas. El término ha sido hoy satanizado y convertido en sinónimo de sicarios y paramilitares. Pero se olvida con frecuencia que las autodefensas fueron creación oficial. Surgidas hacia 1965, por iniciativa del Ejecutivo, su existencia fue refrendada por las ramas Legislativa y Judicial del poder público como una extensión, en la comunidad, del principio universalmente aceptado de legítima defensa.

Como ojos y oídos de las Fuerzas Armadas, las autodefensas cumplieron una labor muy eficaz en el Magdalena Medio, en Córdoba y Urabá. Existen hoy en el Perú con el nombre de Rondas Campesinas, y son pieza fundamental en la lucha contra Sendero Luminoso. En Colombia jugaron un papel análogo, hasta el momento en que, en zonas del Magdalena Medio, resultaron infiltradas por el narcotráfico y aparecieron asociadas a asesinatos y masacres. Estos hechos, en realidad, comprometían a grupos determinados y no a todo el movimiento de autodefensas, que seguía teniendo un origen profundamente popular en muchas regiones y actuaba en estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas. Declarándolas ilegales, en 1989, el gobierno de Barco procedió con la ligereza del cirujano que, ante un foco infeccioso surgido en un dedo, procede a contar todo el brazo. Ejército y Policía perdieron así un arma vital en la lucha antsubversiva.

Empresa millonaria

De esta manera, al mismo tiempo que intensificaban y enriquecían considerablemente su acción a través de la combinación de formas de lucha, las fuerzas de la Coordinadora Guerrillera lograron que sus directas o soterradas ramificaciones en nuestro universo político desmontaran piezas esenciales en el dispositivo detensivo del Estado. La suya ha sido, sin la menor duda, una estrategia triunfante.

Este poder de la guerrilla se vio además reforzado espectacularmente por su capacidad económica. La subversión es hoy la empresa más rentable que tiene el país: 150 mil millones de pesos al año, según investigación realizada por la revista *Semana*, representados esencialmente por los impuestos al cultivo y procesamiento de la coca y la heroína, la extorsión a la producción de oro, a los contratistas del Arauca, la vacuna y el siniestro expediente de los secuestros, los cuales produjeron el año pasado más de 29 mil millones.

Finalmente, la subversión ha logrado hoy un poder de presencia e intimidación muy grave en departamentos como César, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare. Virtualmente se está viviendo allí una cohabitación con la guerrilla, que actúa como un Estado paralelo. Obligados a convivir con esta tremenda amenaza, numerosos parlamentarios, diputados o concejales acaban haciéndole el juego a la guerrilla y a sus diversas propuestas como una manera de preservar su vida. Esta circunstancia explica, por ejemplo, el eco que han dado hasta hace muy poco tiempo a los diálogos regionales, evidente maniobra táctica de la subversión para consolidar su poder local. Ni siquiera ciertos diarios regionales escapan al chantaje guerrillero.

Nos encontramos, pues, ante una situación muy distinta a la de hace diez años. Hoy la guerrilla es considerablemente más fuerte que entonces y el Estado es más débil. El diálogo ha sido utilizado por la Coordinadora como una táctica, y una táctica al servicio de su estrategia de guerra, y no como un medio de llegar a la paz. El diálogo, así concebido, le rinde beneficios. Ha sido, en primer término una manera de inhibir grandes operaciones ofensivas del Estado. En segundo lugar, es utilizado como una tribuna para legitimar la acción de la guerrilla y deslegitimar la del Estado. De ahí la insistencia en discutir, en Caracas, y Tlaxcala, temas tales como la apertura, el racionamiento eléctrico o la corrupción administrativa. Por último, el empeño en buscar escenarios internacionales se explica por el deseo de

aparecer como una fuerza beligerante de igual importancia que el gobierno legítimo.

La conclusión final de este análisis es la siguiente: la Coordinadora Guerrillera gana más con la guerra que con la paz. Sólo llegaría a la mesa de negociaciones cuando las actuales relaciones de fuerza se hubieran invertido. En otras palabras, la fórmula del presidente López Michelsen cobra hoy toda su vigencia si se aplica no solo al narcotráfico sino también a la guerrilla: derrotarla primero y negociar después.

Hay quienes dicen que ello no es posible. Nos recuerdan que desde hace treinta años, el Ejército ha intentado someter a la guerrilla, sin que lo haya logrado. Es un falso razonamiento. La guerrilla ha sido derrotada en muchos países: en Grecia, Birmania, Indonesia, Venezuela, Uruguay y Argentina. Sólo ha triunfado allí donde su causa se identificó - tramposamente, desde luego - con la de una nación dispuesta a derrocar a un dictador en nombre de la democracia: en Cuba y en Nicaragua.

Para detener la subversión se necesita, en primer término, admitir que ella ha desatado una guerra irregular, del mismo modo que para combatir un cáncer es preciso, ante todo, identificarlo. Luego resulta indispensable movilizar a la Nación en vez de dejarla como simple espectadora de un conflicto; asumir un marco legal de excepción reviviendo el fuero militar y la Justicia Penal Militar, así sea al precio de una reforma constitucional, para enfrentar la lucha subversiva; multiplicar las brigadas móviles; reivindicar, a través de las autodefensas, la capacidad defensiva de la población civil; establecer una rígida estrategia de medios; combatir la subversión política impidiéndole que prosiga su labor.

Fue lo que hizo Rómulo Betancourt en Venezuela, sin que por ello perdiera su régimen el perfil democrático. Pero todo ello, si no queremos que el país se hunda en el caos y la sangre de una subversión triunfante, depende de dos simples palabras que hasta hace poco habían brillado por su ausencia: voluntad política.